



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	VERBAL – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTES	JOSÉ HILDEBRANDO MARTÍNEZ Y MARÍA LUZ EDIT ACEVEDO EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO JULIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ ACEVEDO
DEMANDADA	MARTHA ELENA LÓPEZ ZAPATA
RADICADO	05001 31 03 016 2019 00240 01
DECISIÓN	CONFIRMA AUTO APELADO

Medellín, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

El despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en el asunto de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. En diligencia de 22 de junio de 2021, el Juzgado 016 Civil del Circuito de Medellín aprobó el contrato de transacción suscrito entre las partes del proceso y declaró la terminación del mismo por transacción.

1.2. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de los demandantes interpuso recurso de apelación. Solicitó que el auto recurrido fuera revocado y que en su lugar se diera continuidad al procedimiento. Bajo esta perspectiva, adujo que desde el 15 de febrero de 2021 se aportó memorial contentivo de una declaración juramentada rendida por los demandantes ante la Notaría 23 del Círculo de Medellín, en que se refirió que efectivamente habían celebrado contrato de transacción; pero el motivo para suscribirla fue que, la parte demandada se encargaría de arreglar con el abogado de ellos; además, se dijo en la declaración que el hijo de la demandada les había indicado que tomaran el dinero porque era mejor *"pájaro en mano que cien volando"*, pues en caso contrario, el proceso demoraría tres o cuatro años, sumado a que, el profesional del derecho se *"quedaría con la plata"* y los demandantes *"quedarían con el enemigo en el pueblo"*.

Con lo anterior, se quiso significar que la transacción no se firmó bajo una libre y espontánea voluntad, ya que se vislumbra la inducción al error, bajo promesas falsas, y amenazas, lo que invalida el contrato. En este sentido, arguyó que se desconoció lo indicado en los artículos 1602 a 1604 del Código Civil relativos al efecto las obligaciones y fuerza legal del contrato.

1.3. El Juzgado 016 Civil del Circuito de Medellín dio traslado del recurso de apelación.

1.4. El apoderado judicial de la parte demandada indicó que la jurisprudencia ha señalado que la transacción es un contrato que celebran las partes, sin que se requiera el consentimiento de los apoderados, por cuanto no es un acto de litigio, es más la Corte ha precisado que es la forma más clara de no ejercer el litigio, razón por la cual las partes tienen tal prerrogativa. Trajo a consideración que según el artículo 2469 del Código Civil, la transacción es un contrato en que las partes terminan un litigio existente entre ellas o precaven un eventual pleito, lo cual implica un acto de disposición porque en ella, cada una de las partes cede parcialmente en el derecho que le asiste. De igual modo, el artículo 2478 ibídem, prescribe que si al tiempo de celebrarse la transacción, el proceso estuviese terminado, las partes también pueden transigir sobre esa eventualidad. Advirtió que el contrato de transacción sometido a consideración del despacho, fue celebrado por escrito, con el cumplimiento de las formalidades que la ley establece para tal efecto, que, aunado a ello, el artículo 312 del Código General del Proceso, dispone que las partes podrán transigir la Litis y finalmente, apuntó que no existe prueba sobre lo expuesto por el apoderado de los demandantes, pues la declaración aportada no constituye lo que se conoce como vicio en el consentimiento.

1.5. La llamada en garantía, no se pronunció al respecto.

1.6. El Juzgado 016 Civil del Circuito de Medellín concedió el recurso de alzada en el efecto suspensivo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La transacción es en efecto, un contrato mediante el cual las partes extrajudicialmente ponen fin al litigio al hacerse concesiones mutuas y recíprocas, por lo que las obligaciones así adquiridas pueden ser demandadas ejecutivamente. No obstante, no todo evento litigioso puede ser objeto de transacción, pues los artículos 2473 a 2475 del Código Civil señalan que no se podrá transigir sobre el estado civil de las personas, sobre alimentos futuros sin la correspondiente aprobación judicial, ni sobre derechos ajenos e inexistentes. De otro lado, los artículos 2476 y 2478 ídem disponen que será nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados, y en general por dolo o violencia, y la que, al tiempo de celebrarse, estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

La transacción conforme se establece en el artículo 2470 del Código Civil, exige, de un lado, disponibilidad del derecho objeto de ella, y, del otro, capacidad de disposición de las partes que acuden a celebrar ese contrato. A su vez, el artículo 2483 de la codificación civil, establece que *"La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes"*.

2.2. El artículo 1502 del Código Civil dispone que para que una persona se obligue a otra por acto o declaración de voluntad requiere ser legalmente capaz; haber consentido en dicho acto mediando declaración que no adolezca de vicio; que el acto recaiga sobre un objeto lícito, y el mismo tenga causa lícita. En complemento de esta norma, el artículo 1508 ibidem dispone que el consentimiento puede afectarse por vicios, tales como la fuerza, el error, y el dolo, dado que aquél debe ser libre y espontáneo para constituir válidamente el convenio.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia SC1681 de 15 de mayo de 2019, expuso:

"[L]a ley no solamente reconoce la facultad que tienen los particulares para regular en gran parte sus relaciones jurídicas mediante manifestaciones privadas de voluntad, sino que también dispone de los mecanismos adecuados

para protegerlos contra su propia ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la violencia de que pueden ser víctimas al hacer uso de la referida facultad. Por este motivo, para todo acto jurídico no solamente se requiere que los agentes otorguen voluntariamente su consentimiento, sino que también se exige que lo hagan con cierto grado de conciencia y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, pero queda viciado de nulidad; es decir, que no adolezca de ciertos vicios, cuya presencia destruye esa libertad y conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas”.

2. El error y el dolo como vicios del consentimiento.

Respecto del error, los artículos 1510 a 1512 del Código Civil consagran que éste puede referirse a la especie del acto, a la identidad de su objeto o su sustancia, o a la persona con quien se celebra.

En lo que respecta al dolo, esto es, la maniobra engañosa perpetrada con el fin de influir necesariamente en la voluntad de otro a fin de que consienta en contratar, el artículo 1515 prevé que éste no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes y aparece claramente que sin él no se hubiera convenido.

3. La fuerza como vicio del consentimiento.

La fuerza, al igual que los otros eventos constitutivos de vicios del consentimiento, da lugar a la nulidad relativa del contrato, según el artículo 1513 del Código Civil, en concordancia con el 1741 de la misma obra.

Sin embargo, para que la violencia repercuta en la voluntad y, por ende, afecte la validez del acto, requiere ser «capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio tomando en cuenta su edad, sexo, condición». En ese orden, se considera «como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave» (art. 1513 del C.C.).

Ahora, conforme el artículo 1514 ibídem, para que la fuerza vicie el consentimiento «no es necesario que la ejerza aquél que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento», lo cual significa que se genera el vicio cuando se

ejerce, con las características anotadas, con el objetivo de «obtener el consentimiento» en el negocio respectivo.

(...) 4. Consecuencia jurídica de los vicios del acto.

El legislador ha consagrado el error, el dolo y la fuerza como vicios del consentimiento, razón por la cual, conforme prevén los artículos 1741 y 1743 del Código Civil, los afectados pueden solicitar la declaración de la nulidad relativa del acto o contrato, cuando estimen acreditada su configuración (...)

3. CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, esta dependencia judicial encuentra que la decisión de primera instancia debe ser confirmada, en tanto que el acuerdo transaccional allegado por el apoderado de la parte demandada -el cual fue suscrito por las partes del presente proceso-, cumple con los requisitos sustanciales y procesales exigidos por el ordenamiento jurídico y, además, no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento que constituya una posible nulidad de la convención, conforme lo pretende el apoderado judicial de la parte demandante.

3.1. En efecto, el Abogado en mención señaló que el contrato de transacción no fue suscrito por sus poderdantes bajo una libre y espontánea voluntad, pues advirtió que se observa unos “matices de inducción al error”, bajo promesas falsas, y claras amenazas, lo que invalida el acuerdo en mención; no obstante, tales afirmaciones carecen de sustento probatorio, conforme el despacho pasa a exponer. Nótese que en la audiencia practicada el 22 de junio de 2021, el juez de primer grado, previo a dar aprobación a la transacción, interrogó a los demandantes sobre el documento suscrito por ellos y simplemente refirieron que no sabían lo que firmaron bajo engaños –sin especificar cuáles-, pero de manera contradictoria informaron que sabían que iban a recibir \$20'000.000^{oo} a cambio de terminar el litigio, tal cual quedó pactado en el escrito contractual.

Véase que, en el interrogatorio practicado, José Hildebrando Martínez, expuso que sí había suscrito el acuerdo transaccional, pero que no sabía lo que decía ahí, porque no sabe leer y afirmó lo siguiente: “*prácticamente fui engañado. El señor que me entregó el papel me dijo que firmara que él arreglaba con mi*

abogado". También declaró que firmó porque el hijo de la demandada le dijo "que recibiera eso que era mejor un pájaro en la mano que cien volando. El abogado se lleva la plata y usted queda con el enemigo en el pueblo", pero más adelante adujo que le prometieron \$20'000.000^{oo}, de los cuales recibió directamente \$5'000.000^{oo} el 30 de marzo de 2021, situación que fue confirmada por María Luz Edit Acevedo, quien añadió que no leyó el documento porque no entiende mucho de eso y que firmó "Porque el señor nos decía que firmáramos, que hiciéramos un acuerdo de esa plata, porque el abogado se quedaba con todo. Me dijo que el abogado nos estaba incumpliendo, cosa que no es así, por eso le dije que al abogado había que responderle".

Estas afirmaciones de los demandantes -desprovistas de otros medios probatorios- no dan cuenta, se insiste, por sí solas, de la existencia de un vicio en el consentimiento al momento de suscribir el contrato de transacción, y más bien dan a entender que los declarantes sabían la suma de dinero que iban recibir y que el proceso terminaría por medio de ese acuerdo. Es decir que, en esta oportunidad, no se acreditó la inducción al error alegada por el apoderado de los demandantes, pues no se acreditó la discrepancia entre el objeto y lo que se predica de él, esto es, la diferencia entre la realidad contractual y la convicción del sujeto errado, pues aquí los demandantes conocían la finalidad del convenio. La parte apelante tampoco acreditó que la fuerza haya intervenido en la celebración de la negociación impugnada, pues no existe algún medio de convicción que sirva para sustentar la aseveración del recurrente de que el convenio tuvo como causa eficiente alguna amenaza, pues las meras aseveraciones de las partes en cuanto a que les dijeron que tomaran el dinero porque era mejor *"pájaro en mano que cien volando"*, porque en caso contrario, el proceso demoraría tres o cuatro años y que el profesional del derecho se *"quedaría con la plata"* así como que los demandantes *"quedarían con el enemigo en el pueblo"*, carecen de determinación o contundencia para producir un justo temor y viciar el consentimiento, ni aparecen corroboradas por otras pruebas.

Además, tampoco se acreditó la existencia del dolo, ya que las meras afirmaciones de los demandantes no dan cuenta de que existió un comportamiento malintencionado de la parte demandada, encaminado a

engañar a los demandantes de tal modo que determinara el consentimiento de estos.

Por último, conviene precisar que, si bien el apoderado judicial de los demandantes expuso que estos fueron motivados a suscribir el acuerdo también porque la parte demandada se encargaría de arreglar con el abogado de ellos, lo cierto es que tal situación por sí sola no denota irregularidad en el consentimiento de los contratantes ni en el mismo contrato, máxime que en la cláusula tercera del acuerdo se dispuso que: *"El valor de la indemnización establecida, lo reciben los demandantes libres de toda afectación, estableciendo claramente las partes que aquí realizan la disposición de los derechos litigiosos, que cualquier suma de dinero que se cause a favor de los abogados que los han representado en el presente proceso, será por cuenta de la parte demandada. Es decir, tanto los honorarios del abogado de los demandantes como los honorarios del abogado de la demandada, serán asumidos y pagados por la parte demandada"*.

3.2. Así las cosas, la parte recurrente, quien pretendía desvirtuar la validez del contrato de transacción suscrito, no cumplió con la carga probatoria que le correspondía de acreditar los vicios del consentimiento alegados. Valga traer al respecto, lo que la Corte Suprema de Justicia ha expuesto en cuanto a que,

"(...) los interesados en la invalidez deben probar los hechos que la sustentan, dado que, conforme el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y 1516 del Código Civil, «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.», y «[e]l dolo no se presume sino en los casos especialmente previsto por la ley. En los demás debe probarse.»

*Por consiguiente, si se alega que se consintió en una compraventa mediada por fuerza física o moral, debe demostrarse la violencia y su conexión con el negocio celebrado en esas condiciones"*¹.

3.3. En este orden, este Tribunal confirma que en la celebración del contrato de transacción objeto de reproche no se acreditó la configuración de algún vicio en el consentimiento que constituya una posible nulidad, sino que por el

¹ SC1681 de 15 de mayo de 2019, MP. Luis Alonso Rico Puerta.

contrario quedó establecido que si bien los demandantes adujeron no tener conocimiento sobre el contenido del acuerdo, lo cierto es que en la práctica del interrogatorio pusieron de presente que conocían el contenido esencial del pacto, pues sabían que se trataba de un arreglo sobre el litigio existente, conocían el valor de lo acordado e inclusive habían recibido un abono de dicha suma de dinero, lo cual da cuenta de que tuvieron la voluntad libre y espontánea de llegar a un arreglo con la parte contraria.

4. En consecuencia, la decisión proferida el 22 de junio de 2021 por el Juzgado 016 Civil del Circuito de Medellín, mediante la cual se aprobó la transacción y se terminó el proceso, será confirmada. Sin condena en costas en esta instancia, por cuanto no se causaron.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en la diligencia de 22 de junio de 2021, proferida por el Juzgado 016 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Sin condena en costas por cuanto no se causaron.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada